

La Comunidad de Paz rechazó las declaraciones de Uribe y lo tildó de insensible

No al ingreso de la Policía

Los habitantes de San José de Apartadó rechazaron ayer nuevamente la decisión del Gobierno Nacional de llevar a la Fuerza Pública a su territorio, y pidieron el apoyo de la sociedad nacional e internacional para mantenerse como una Comunidad de Paz.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se pronunció ayer por medio de un comunicado sobre las declaraciones dadas el pasado domingo por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien acusó a algunos líderes de la comunidad de auxiliar a las Farc y anunció el pronto ingreso de la Fuerza Pública a la zona.

«Es clara la intención del Estado colombiano de destruir nuestro proceso de Comunidad de Paz. Nuevamente se va a apelar a los montajes para criminalizar la acción legal y legítima de los líderes de la comunidad, así como de sus acompañantes y defensores», dicta la misiva.

En su intervención del domingo, Uribe dijo «en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista».

La Comunidad de Paz también indica en su carta que ésta no sería primera vez en la que son víctimas de «montajes judiciales por parte de la Brigada XVII, contando con la complicidad de la Fiscalía General de la Nación» para



REACCIONES

Opiniones divididas

Tras las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, la presidenta de Redepaz, Ana Teresa Bernal, indicó a Caracol Radio que la oposición del dirigente hacia las Comunidades de Paz viola el Derecho Internacional Humanitario.

«La gente tiene derecho a no estar vinculado al conflicto armado... desde hace mucho, desde que el Presidente era Gobernador de Antioquia, se ha mostrado en contra de estas comunidades», expresó Bernal.

Por su parte, el obispo de Apartadó, monseñor Germán García Isaza, señaló que es necesaria la presencia de los organismos de seguridad en la zona, pero acompañada de inversión social. «Yo personalmente hubie-

ra preferido que se comenzara con el arreglo de las carreteras, y la presencia civil del Estado, pero la decisión está bien, porque donde manda capitán no manda marinero», dijo el Obispo.

Así mismo, su colega de Enigativá, Héctor Gutiérrez Pavón, se mostró a favor de la decisión del Presidente y expresó que el Ejército debe estar en todas las Comunidades de Paz del país. «Nosotros no creemos que sea conveniente que el país comience a subdividirse, en cuanto las Fuerzas Armadas debemos apoyarlas, pues son la manifestación de la justicia y de la seguridad, pero aún así no deben vincular a la población civil en la guerra», comentó el Obispo.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó rechazó ayer nuevamente el ingreso de la Policía a su jurisdicción. En la foto, la llegada de la Policía al corregimiento de Nutibara en enero pasado

pués de la masacre, el 21 y 22 de febrero, de ocho miembros de la Comunidad de Paz, incluidos tres niños -uno de 18 meses, uno de 6 años y otro de 11 años, al igual que dos de los líderes de la comunidad; seguido del atentado a la Comisión de la Fiscalía que revisaba estos hechos, que llevó a la muerte de un Policía.

La muerte a machetazos de estas personas, unidas a los más de 150 decesos violentos registradas en sus siete años de neutralidad, y a la fuerte presencia de las Farc, de la que incluso se ha dicho que realiza operaciones desde ese lugar, llevaron al Gobierno a hacer presencia en San José de Apartadó a pesar de la negativa de la comunidad, que amenaza con desplazarse tras la llegada de la Policía.

Aunque la comunidad reconoce en su comunicado el constante peligro que corren sus vidas por su condición de Comunidad de Paz, anuncia que seguirá resistiendo pacíficamente a los ataques.

«Mientras exista esta determinación nuestro proceso seguirá vivo a pesar de los asesinatos, las masacres, los montajes... Es un camino largo y difícil el que nos queda por recorrer y tal vez algunos ya no estemos, porque tenemos muy claro, como lo tenía Luis Eduardo, que en cualquier momento peligra nuestra vida y nuestra libertad», dice el comunicado.

De igual forma, en la misiva la comunidad expresa su indignación por el silencio del Presidente tras la masacre de estas ocho personas, y porque su tardío pronunciamiento sólo se haya ocupado de «presentar públicamente nuevos mecanismos de agresión, situación que revela profunda insensibilidad frente a este crimen que nos enluta».

Pero esta condición avalada hasta el momento por el Gobierno ha sido revaluada des-